

Señor
JUEZ PROMISCOU MUNICIPAL
SATIVASUR BOYACÁ
E. S. D.

REFERENCIA: ACCION DE TUTELA
ACCIONANTE: MARITZA YULIETH MEJÍA PARRA
ACCIONADO: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL –
DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL EN BOYACÁ.

MARITZA YULIETH MEJÍA PARRA, mayor de edad, vecina en el municipio de Sativasur, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.052.398.571 expedida en Duitama Boyacá, domiciliada y residente en el municipio de Sativasur, actuando en nombre propio, acudo respetuosamente ante su Despacho para promover **ACCION DE TUTELA**, en contra de la **REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL – DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL EN BOYACÁ** de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos Reglamentarios 2591 de 1.991 y 1382 de 2.000, para que judicialmente se me conceda la protección de los derechos constitucionales fundamentales al DEBIDO PROCESO y AL TRABAJO que considero vulnerados y/o amenazados por las acciones y/o omisiones de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia - Delegación Departamental En Boyacá, de acuerdo a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: La Registraduría Nacional del Estado Civil – Delegación Departamental En Boyacá, mediante la Resolución No. 356 de 2021 (30 de Junio), convoco al proceso de selección para la provisión de ciento treinta y ocho (138) empleos de Auxiliar Administrativo 522004, en la Circunscripción electoral de Boyacá, dentro de los cuales se encuentra el Municipio de Sativasur.

SEGUNDO: Cumpliendo con los requisitos requeridos por la convocatoria, me inscribí el día 6 de julio del año en curso, para lo cual dentro de los requisitos se debía diligenciar la dirección de residencia y automáticamente el candidato quedaba postulado para la plaza de su domicilio.

TERCERO: Posteriormente mediante resolución No. 389 del 8 de julio de 2021, se modificó el cronograma de la resolución 356 de 2021 (30 de Junio).

CUARTO: Mediante comunicado de fecha 10 de julio de 2021, el Gerente de Talento Humano de la Registraduría Nacional del Estado Civil, modifíco el cronograma del proceso de la convocatoria, programando las pruebas de conocimientos, para el día 14 de julio de 2021 en horario de 07:00 am a 10:00 a.m.; siendo este modificado nuevamente debido a la cantidad de personas inscritas, mediante comunicado de fecha 13 de julio de 2021, que las pruebas de conocimiento en la Circunscripción Electoral de Boyacá se realizarían el día 15 de julio de 2021, a partir de las 9: am.

QUINTO: El día 14 de julio de 2021, fui notificada para presentar la prueba de conocimiento el 15 de julio a las 9:00 de la mañana.

SEXTO: Que el día 23 de julio de 2021, mediante Resolución 411 “*Por la cual se conforma y adopta la lista de elegibles para proveer ciento treinta y ocho (138) empleos con carácter de supernumerario del nivel asistencial en la Circunscripción electoral de Boyacá LOS DELEGADOS DEL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL EN BOYACÁ*”, conformaron la lista de elegibles de la siguiente manera:

1	1076658749	FRANCISCO JAVIER	RODRIGUEZ	ORJUELA	SATIVASUR
2	1052398571	MARITZA YULIETH	MEJIA	PARRA	SATIVASUR
3	1010241172	JOSE MANUEL	NOVA	JOYA	SATIVASUR
4	1002694734	MARITSA DANIELA	APARICIO	SANDOVAL	SATIVASUR
5	1049644522	JESSICA YULIANNA	JOYA	APARICIO	SATIVASUR
6	1002694756	LIZETH LUCIA	LEON	JOYA	SATIVASUR
7	1056868265	ADRIANA KATERINE	HIGUERA	CORREDOR	SATIVASUR

SEPTIMO: En dicha resolución en el artículo segundo se informa que las Reclamaciones a la publicación de lista de elegibles a que hubiere lugar, se presentaran y radicarán del día 26 de julio de 2021 en medio físico en la sede de la Delegación Departamental de Boyacá, Registraduría Especial o Municipal, según corresponda. No se aceptarán reclamaciones enviada por correo electrónico o al correo sopORTEconvocatoria@registraduria.gov.co.

OCTAVO: El día 26 de julio de 2021, a las 10:15 a.m., presente la correspondiente reclamación a la lista de elegibles, ante la Registraduría Municipal de mi Municipio de Residencia, oficio presentado con copia a la personería Municipal, siendo entregado a las 10:58 a.m del mismo día.

NOVENO: El objeto de mi reclamación, fue sustentada en base al artículo 6 de la resolución No. 356 de 2021 (30 de junio), que establece:

*6. La inscripción sólo podrá realizarse para una de las plazas convocadas **y deberá corresponder al sitio de domicilio del aspirante**, por lo que no se podrán realizar reubicaciones.* Subrayado fuera de texto.

Donde se demuestra que el señor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORJUELA **NO ES DOMICILIADO** en el municipio de Sativasur, esto basado en las consultas realizadas en las bases de datos públicas nacionales, sin violar el derecho a la intimidad y protección de datos, así con la indagación con los líderes municipales y de conocimiento propio que se desconoce de vista, trato y arraigo el domicilio o residencia del señor RODRIGUEZ ORJUELA, cosa opuesta que ocurre con los demás integrantes de la lista de elegibles y de la suscrita.

DECIMO: el día 27 de julio de 2021 a las 4:57 p.m., a través de correo me fue contestada de manera negativa la reclamación realizada, basada en la resolución 356 del 30 de junio de 2021, en su artículo primero y sexto donde concluyen que la dirección de domicilio no es determinante en el proceso de elección ya que se registro solo para aclarar que no se iban a aceptar solicitudes de traslado.

DECIMO PRIMERO: Una vez contestada la reclamación interpose el recurso de Reposición y en subsidio de apelación, recurso enviado vía correo electrónico el día 28 de Julio de 2021 a las 06:39 de la tarde, el mismo fue presentado en medio físico en la Registraduría Municipal el día 29 de Julio a las 09:10 a.m. y en el cual manifestaba mi inconformismo ante la respuesta dada por los Delegados de la Registraduría Nacional para Boyacá,

considerando que la respuesta dada no era de fondo, ni congruente atendiendo a la sentencia T-149 de 2013 de la Corte Constitucional, así como ratificando el artículo 6 de la resolución 356 del 30 de junio de 2021, considerando que la dirección de residencia del postulado si es determinante para la elección, ya que esta se solicitó al momento del registro de la inscripción y no se permitía elegir el lugar donde posteriormente podría ejercer el cargo, lo que puede establecerse como uno de los filtros para la inscripción donde el aspirante debe decir de manera cierta el lugar de su residencia y el señor RODRÍGUEZ ORJUELA pudo optar por presentarse en su lugar de residencia y/o domicilio sin llegar a afectar su posible elección, ya que el mérito para el personal de supernumerario fue a nivel nacional. Demostrando nuevamente que el señor **NO RESIDE** en este municipio.

DECIMO SEGUNDO: Considero que el Señor RODRÍGUEZ ORJUELA al optar por inscribir un domicilio diferente aplicó una flagrante violación de los principios de la moralidad, imparcialidad y transparencia en la gestión de los procesos de selección; garantía de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y llevar a cabo los procedimientos de selección ya que si bien es cierto la Registraduría Nacional, como órgano encargado de adelantar el Proceso de Selección del personal supernumerario, confió en la buena fe de cada aspirante al momento de registrar su domicilio, al hacer en primera instancia la debida reclamación, la suscrita puso en conocimiento que el Señor RODRÍGUEZ ORJUELA no es una persona domiciliada en el Municipio de Sativasur Boyacá, haciendo caso omiso por parte de esta Entidad.

DECIMA TERCERA Por medio de la Personera Municipal siendo las 6:11 p.m. recibí respuesta a mi recurso reposición y en subsidio de apelación donde manifestaron que para esta clase de reclamaciones no proceden los recursos interpuestos.

DECIMA CUARTA: El día 30 de Julio fue publicada en la pagina web de la Registraduría Nacional Resolución No. 418 de 2021 "Por la cual se conforma y adopta la lista de elegibles definitiva para proveer ciento treinta y ocho (138) empleos con carácter de supernumerario del nivel asistencial en la Circunscripción electoral de Boyacá" emitida por los Delegados del Registrador Nacional del estado Civil en Boyacá, y en la cual se evidencia que en sus considerandos fueron tomadas reclamaciones hechas por aspirante al cargo de auxiliar administrativa, pero en ninguno de ellos se consideró mi reclamación, y a su vez la mencionada resolución continúa con el Señor RODRÍGUEZ ORJUELA como primer integrante en la lista de elegibles.

DECIMA QUINTA: una vez agotadas las instancias y no habiendo respuesta favorable me han sido vulnerados mis derechos fundamentales al debido proceso, derecho al trabajo

DERECHOS VULNERADOS

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Fundamento esta acción en el artículo 86 de la constitución política y sus decretos reglamentarios 2591 y 306 de 1992. Igualmente, en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

DERECHO AL DEBIDO PROCESO:

Este es una institución importantísima dentro del derecho moderno, ya que contiene las garantías necesarias para el derecho procesal. Se trata de un derecho fundamental reconocido en el derecho colombiano y en la mayoría de constituciones modernas.

En la Constitución el artículo 29 enuncia la institución del debido proceso que reza dentro de sus líneas lo siguiente:

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. El derecho a obtener acceso a la justicia. Derecho a la independencia del Juez.

Derecho a la igualdad entre las partes intervinientes en el proceso. Derecho a un Juez imparcial. Derecho a un Juez predeterminado por la ley. La favorabilidad en la pena. Derecho a la defensa. Derecho a presentar pruebas. El debido proceso además es considerado un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al Juez.

De esta forma, el Debido Proceso es el pilar fundamental del Derecho Procesal y se expresa en la exigencia de unos procedimientos en los que debe respetarse un marco normativo mínimo en pro de la búsqueda de justicia social. El derecho al debido proceso entraña el servicio del Estado a través de su administración, remitiendo adicionalmente al artículo 229 de la misma Carta Política donde describe que cuando un funcionario omite o extralimita sus poderes dentro de un trámite administrativo, no sólo quebranta los elementos esenciales del proceso, sino que igualmente comporta una vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, del cual son titulares todas las personas naturales y jurídicas, que en calidad de administrados.

Es importante que se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración.

El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se dé continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general.

Es así como la reiterada jurisprudencia trata sobre el tema: "La garantía del debido proceso, plasmada en la Constitución colombiana como derecho fundamental de aplicación inmediata (artículo 85) y consignada, entre otras, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículos 10 y 11),

en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclamada el mismo año (artículo XXVI) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969, Artículos 8 y 9), no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características"

"El derecho al debido proceso es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a la administración pública o ante los jueces, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen cada proceso administrativo o judicial genera una violación y un desconocimiento del mismo." (C-339 de 1996).

"El debido proceso constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda - legítimamente- imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación administrativa del Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios criminales."

"El debido proceso comprende un conjunto de principios, tales como el de legalidad, el del juez natural, el de favorabilidad en materia penal, el de presunción de inocencia y el derecho de defensa, los cuales constituyen verdaderos derechos fundamentales".

"El debido proceso constituye un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento para las actuaciones tanto judiciales como administrativas, para la defensa de los derechos de los ciudadanos, razón por la cual deben ser respetadas las formas propias del respectivo proceso. Lo anterior garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades públicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico. Por ello los ciudadanos sin distinción alguna, deben gozar del máximo de garantías jurídicas en relación con las actuaciones administrativas y judiciales encaminadas a la observancia del debido proceso." (T- 078 de 1998).

"La importancia del debido proceso se liga a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento y así lo insinuó Lhering. Con este método se estaría dentro del proceso legal pero lo protegible mediante tutela es más que eso, es el proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba, y, lo más importante: el derecho mismo. El debido proceso que se ampara con la tutela está ligado a las normas básicas constitucionales tendientes al orden justo (para ello nada más necesario que el respeto a los derechos fundamentales); ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principios y derechos y este sería el objeto de la jurisdicción constitucional en tratándose de la tutela". (T- 280 de 1998).

DERECHO AL TRABAJO:

El artículo 25 de la Constitución Política dispone que *"El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas."*

La interpretación constitucional recae sobre un objeto de mayor complejidad el derecho al trabajo como uno de los valores esenciales de nuestra organización política, fundamento del Estado social de derecho, reconocido como derecho fundamental que debe ser protegido en todas sus modalidades y asegurar el derecho de toda persona al desempeño en condiciones dignas y justas, así como los principios mínimos fundamentales a los que debe sujetarse el legislador en su desarrollo y la obligación del Estado del desarrollo de políticas de empleo hacen del derecho al trabajo un derecho de central importancia para el respeto de la condición humana y cumplimiento del fin de las instituciones. La interpretación que surge de la dimensión constitucional descrita no persigue la solución de un conflicto o diferencia entre el trabajador y el empresario para hallar la solución correcta sino pretende, la definición de campos de posibilidades para resolver controversias entre derechos o principios fundamentales. La protección del derecho al trabajo desde la interpretación constitucional tiene el propósito de optimizar un mandato en las más altas condiciones de racionalidad y proporcionalidad sin convertirlo en el derecho frente al cual los demás deben ceder.

Por su parte la Sentencia C-107/02 señala:

El trabajo como derecho, implica una regulación fundada en la libertad para seleccionarlo, por lo que, salvo las restricciones legales, consiste en la realización de una actividad libremente escogida por la persona dedicando a ella su esfuerzo intelectual o material, sin que puedan impedírselo los particulares ni el Estado a quien, por el contrario, le compete adoptar las políticas y medidas tendientes a su protección y garantía.

Este derecho, además, comporta la exigencia de su ejercicio en condiciones dignas y justas, es decir, su realización en un entorno sin características humillantes o degradantes o que desconozca los principios mínimos fundamentales establecidos por la Constitución, y además que permita su desarrollo en condiciones equitativas para el trabajador.

La jurisprudencia constitucional también ha considerado el derecho al trabajo como "... un derecho fundamental que goza de especial protección del Estado y, es uno de los bienes que para todos pretende conseguir la organización social, según el preámbulo, y uno de los valores fundamentales de la República, conforme al artículo 1º. Ibídem..".

Así mismo, la Sentencia C-593/14, expone el alcance del **DERECHO AL TRABAJO**- enmarcándolo como una Triple dimensión *"La jurisprudencia constitucional ha considerado que la naturaleza jurídica del trabajo cuenta con una triple dimensión. En palabras de la Corporación la "lectura del preámbulo y del artículo 1º superior muestra que el trabajo es valor fundante del Estado Social de Derecho, porque es concebido como una directriz que debe orientar tanto las políticas públicas de pleno empleo como las medidas legislativas para impulsar las condiciones dignas y justas en el ejercicio de la profesión u oficio. En segundo lugar, el trabajo es un principio rector del ordenamiento jurídico que informa la estructura*

Social de nuestro Estado y que, al mismo tiempo, limita la libertad de configuración normativa del legislador porque impone un conjunto de reglas mínimas laborales que deben ser respetadas por la ley en todas las circunstancias (artículo 53 superior). Y, en tercer lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta, el trabajo es un derecho y un deber social que goza, de una parte, de un núcleo de protección subjetiva e inmediata que le otorga carácter de fundamental y, de otra, de contenidos de desarrollo progresivo como derecho económico y social.”

SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL

Su señoría, solicito con todo respeto se decrete la suspensión del nombramiento del cargo al señor Rodríguez Orjuela en la Registraduría Municipal del Estado Civil de Sativasur Boyacá.

El Decreto 2.591 de 1.991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece que el Juez Constitucional, cuando lo considere necesario y urgente para proteger un derecho amenazado o vulnerado “suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere”. En efecto, el artículo 7º de esta normatividad señala:

“ARTICULO 7o. MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el Juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. El Juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso. El Juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado”.

La medida provisional de suspensión de un acto concreto que presuntamente amenaza o vulnera un derecho fundamental, pretende evitar que la amenaza al derecho se convierta en violación o que la violación del derecho produzca un daño más gravoso que haga que el fallo de tutela carezca de eficacia en caso de ser amparable el derecho. Como su nombre lo indica, la medida es provisional mientras se emite el fallo de tutela, lo cual significa que la medida es independiente de la decisión final. El Juez de Tutela podrá adoptar la medida provisional que considere pertinente para proteger el derecho, cuando expresamente lo considere necesario y urgente. Esta es una decisión discrecional que debe ser “razonada, sopesada y proporcionada a la situación planteada”.

PETICIONES

Con fundamento en los hechos relacionados, la jurisprudencia y la normatividad aplicable, muy respetuosamente solicito al (la) señor(a) Juez tutelar mis derechos fundamentales del debido proceso y al trabajo, en razón a que han sido VULNERADOS por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil – Delegación Departamental en Boyacá, en tal virtud.

PRIMERO: Se conceda la MEDIDA PROVISIONAL DEPRECADA, y se ordene a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL – DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL EN BOYACÁ suspender de manera inmediata el nombramiento del cargo al señor Rodríguez Orjuela en la Registraduría Municipal del Estado Civil de Sativasur Boyacá.

SEGUNDO: Su Señoría, solicito muy respetuosamente tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo.

TERCERO: Solicito muy respetuosamente se ordene la exclusión del señor **FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORJUELA**, de la lista de elegibles en el Municipio de Sativasur, publicada mediante **RESOLUCIÓN No. 411 de 2021** (23 de julio) Por la cual se confirma y adopta la lista de elegibles para proveer ciento treinta y ocho (138) empleos con carácter de supernumerario a nivel asistencial en la circunscripción electoral de Boyacá, en atención a que **NO CUMPLE** con los requisitos contemplados para la convocatoria, específicamente la residencia en el Municipio de Sativasur.

CUARTO: Solicito muy respetuosamente el cambio en el orden de la lista de elegibles de la suscrita **MARITZA YULIETH MEJIA PARRA**, identificada con C. C. No. 1.052.398.571, dentro de la convocatoria como Auxiliar Administrativo 512004, teniendo en cuenta la resolución No. 356 de 2021 (30 de junio), para proveer ciento treinta y ocho (138) empleos con carácter de supernumerario a nivel asistencial en la circunscripción electoral de Boyacá, en razón al estar en el orden descendente más próximo y en atención al lleno completo de los requisitos exigidos.

COMPETENCIA

Es usted, señor(a) Juez, competente en primera instancia, para conocer del asunto, por la naturaleza de los hechos, por tener jurisdicción en el domicilio del Accionante conforme al Artículo 1: Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedara así:

***"Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela.** Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeran sus efectos, conforme a las siguientes reglas:*

(...)

PRUEBAS

1. Resolución 356 del 30 de junio de 2021.

2. Notificación presentación a pruebas.
3. Resolución 411 del 23 de julio de 2021 lista de Elegibles.
4. Reclamación a la lista de elegibles.
5. Contestación a la Reclamación.
6. Recurso de reposición y en subsidio de apelación.
7. Contestación al Recurso de Reposición.
8. Resolución 418 del 28 de julio de 2021 lista de Elegibles
9. Pantallazo Sisbén, ADRES y lugar de votación del señor Rodríguez Orjuela.
10. Pantallazo Sisbén, ADRES y lugar de votación de la Accionante

JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que, por los mismos hechos y derechos, no he presentado petición similar ante ninguna autoridad judicial.

NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones en el predio El Alto de las Cruces, vereda La Caldera del municipio de Sativasur, y a través de correo electrónico al e-mail: yuliethh16@gmail.com, celular 321-3158021.

El Accionado: **Registraduría Nacional del Estado Civil – Delegación Departamental en Boyacá** al e-mail: mlcely@registraduria.gov.co.

Agradezco su atención a la presente

Atentamente,


MARITZA YULIETH MEJÍA PARRA
C.C. No. 1.052.398.571 de Duitama